

La izquierda en el Perú. El problema nacional y la democracia

Diez-Canseco, Javier

Javier Diez Canseco: Dirigente y senador de la República por la Izquierda Unida (Perú).

Izquierda democrática, guerrilla y oposición cívica en América Latina

Durante el 21 y 22 de junio de 1991 se llevó a cabo en la ciudad de Managua el segundo Seminario sobre Izquierda Guerrillera y Oposición Cívica. El encuentro reunió a representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador), la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (Colombia), la Izquierda Unida (Perú) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua). A continuación se reproducen las intervenciones de los representantes de las tres primeras agrupaciones .

Entiendo que con este intercambio de experiencias se busca ir de lo particular a lo general, plantear las situaciones concretas que afectan a cada uno de nuestros países, la relación de fuerza que estamos encarando y los proyectos que están planteados para a partir de eso, discutir problemas globales que afectan a los movimientos (políticos-populares de izquierda) o revolucionarios de América Latina.

Obviamente mi presentación la hago desde una militancia y de una opción política, la que represento al interior de la izquierda peruana en el Partido Unificado Mariateguista del Perú; que fue fundador de Izquierda Unida y que maneja hoy con la izquierda peruana una relación que será parte de esta presentación. Creo que sería bueno comenzar con una visión general sobre la situación peruana.

El Perú tiene más o menos 21 millones de habitantes, que pueblan un país de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Alrededor de 12 millones de esas personas están en situación de pobreza crítica, según estudios hechos por consultores de Naciones Unidas. El programa económico neoliberal que se implementa en Perú, asesorado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, incrementó esa pobreza crítica en el transcurso de los últimos meses, pues la cifra anterior oscilaba alrededor de 7.000.000 de personas en esa situación.

Recesión neoliberal

El país enfrenta la aplicación más estricta y rígida que creo se haya registrado en América Latina de los planes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. La gestión del Ministerio de Economía corresponde a la gestión de un cónsul o embajador del Fondo Monetario o el Banco Mundial. Incluso las cifras oficiales del país son reajustadas de acuerdo a los cálculos que hacen los organismos internacionales y no de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco Central de Reserva, que son las dos fuentes fundamentales de producción de cifras oficiales en materia económica.

El programa neoliberal implementado comparte los rasgos de casi todos los que se ejecutan en América Latina; es un programa notoriamente dirigido a la privatización de la economía y a la reducción del rol del Estado en la economía: venta de empresas públicas, disminución de los mecanismos y control del Estado, repliegue del Estado en los mecanismos de comercio internacional, disminución y eliminación de todos los mecanismos de control de divisas en Perú. Hoy ya no hay ni siquiera registro del movimiento de divisas en el país, dado que las divisas no tienen que ser vendidas al Banco Central de Reserva, la estadística en materia del movimiento de divisas ha sido eliminada y hay un absoluto libre manejo en este terreno. Este marco económico signado por la privatización y la liberalización de todos los mecanismos de control por parte del Estado, ha ido de la mano con una política de shock económico que ha sido probablemente la más brutal que ha experimentado América Latina. Fujimori juró su cargo el 28 de julio del 90, y el 8 de agosto del mismo año sacó el primer paquete económico. Este paquete económico produjo ese mes 400% de inflación y el aumento salarial promedio fue nada más del 100%. Es decir, se produjo una contracción del ingreso de los trabajadores asalariados públicos y privados, realmente brutal, y una contracción de la actividad económica en el país impresionante. Ese cuadro no ha sido subsanado en el transcurso de estos meses.

El ingreso nacional en su distribución registra una enorme pérdida en la participación de los trabajadores asalariados sobre el grueso del ingreso nacional; el deterioro ha sido particularmente agudo en el sector público, porque junto a la retracción del Estado de las actividades productivas, comerciales y de control, se ha producido una tendencia a reducir el tamaño del Estado tanto por despidos de empleados públicos, como por congelamiento de sueldos de estos empleados. Hoy día probablemente dos tercios de los empleados públicos del país ganan por debajo del salario mínimo legal. Por ejemplo: una enfermera está ganando alrededor de 30 dólares

mensuales, y un médico del sector salud debe estar bordeando los 85-90 dólares al mes, los maestros están alrededor de los 38 dólares al mes, y el salario mínimo legal está entre 40 y 41 dólares mensuales.

El Estado ha desarrollado una política de incentivar despidos, renuncias ofreciendo bonificaciones que en el mejor de los casos llegaban a 1.000 dólares extras para quienes renunciaran a sus derechos sociales. Los derechos sociales eran de más o menos 200-250 dólares para un trabajador con 15 ó 20 años de servicio, por lo que el incentivo consistía en entregarle 1.000 dólares más. Esto es importante comprenderlo a la luz del dato de que el costo de vida en Lima es más alto que el costo de vida en Nueva York; la gasolina vale casi el doble del precio que en los Estados Unidos y una Coca-Cola de 2 litros estaba costando hasta hace poco alrededor de 1.20 dólar. El costo de los servicios, el costo del combustible y el costo de vida en general es sumamente alto, conduciendo a una situación en la cual tenemos salarios africanos con precios neoyorquinos. Por todo esto la pérdida del nivel de vida de la población es grave y particularmente agudo en el Estado, porque el Estado aparte de incentivar estas renuncias, conduciendo a los niveles salariales de los trabajadores a límites que hacen imposible sobrevivir en la condición de empleado público, tiende a cansar a la gente y a que renuncien masivamente.

Una segunda característica de este plan neoliberal es que la reducción del tamaño del Estado va de la mano de una retracción del Estado de los servicios públicos. El funcionamiento de los servicios públicos en el país es realmente calamitoso. Hoy se han cumplido ya tres meses de huelga de todos los trabajadores del sector salud, en un país que está sufriendo una epidemia del cólera, tiene en la selva una epidemia de dengue, altísimos índices de desarrollo de tuberculosis, fiebre amarilla, y un conjunto de enfermedades, todas síntomas de la pobreza y del abandono de mecanismos preventivos por parte del Estado, junto con la falta de inversiones en los servicios públicos: agua potable, desagüe, luz y energía eléctrica. Hay por lo tanto un deterioro generalizado de las condiciones de vida y de saneamiento urbano en el país. En el caso educación también hay una huelga que debe estar a estas alturas superando los 30 días y por primera vez en la historia del país los directores de los colegios están participando en ella, además del personal burocrático de menor nivel del ministerio. Esta es una huelga muy participativa y que junto con la de salud a nivel de la opinión pública por primera vez encuentran respaldo mayoritario. Este respaldo oscila entre 65 y 75% de la opinión pública a favor de los huelguistas en condiciones realmente críticas en las cuales la población sufre los efectos de la huelga.

Esta retracción del Estado en los servicios básicos, prácticamente abandonándolos a cuenta de la población, es un elemento agudizado en el esquema de gobierno actual, pero no nuevo, y constituye - a nuestro entender - uno de los elementos de la crisis del Estado y sus mecanismos de representación política que va creando lo que hemos llamado vacíos de poder en el Perú. La retracción del Estado, de servicios básicos y de la atención fundamental de necesidades de la población, genera mecanismos de autosatisfacción de estas necesidades y abre por lo tanto espacios en los que la población comienza a asumir funciones propias del Estado.

Otro rasgo fundamental de este programa económico es la disminución radical del ingreso de las mayorías trabajadoras del campo y de la ciudad; y un cuarto aspecto del programa es el hecho de que el programa es terriblemente recesivo. El aparato productivo del país está semiparalizado, el mercado interno se ha comprimido muy fuertemente, venimos de varios años de estancamiento productivo o disminución del producto bruto interno. Sólo el año pasado el PBI decayó en más del 10%.

El programa económico neoliberal incrementa, agudiza la situación de recesión productiva y por lo tanto aumenta los niveles de subempleo y de desempleo. Las cifras señalan que en el país y en particular en la ciudad de Lima - que reúne a un tercio de la población nacional - los niveles de desempleo y subempleo - incluyendo en ese rango a aquellos que ganan menos del salario mínimo legal, trabajan menos de ocho horas al día y carecen de seguridad social - abarcan al 90% de la población de la capital.

El comercio ambulatorio, el mismo que Hernando de Soto ha denominado «el otro sendero» y que algunos llaman «autoempleo individual», realmente tiene ocupado todo el centro de la capital y se calcula que sólo en Lima hay encima de 400.000 vendedores ambulantes que salen, sacan sus paquetes a la calle, ocupan la vía pública y venden. Zonas enteras del centro de la ciudad se han cerrado al tránsito vehicular porque están completamente ocupadas por mercados callejeros, los cuales son expresión de los niveles de subempleo y de sobrevivencia a que la población se ve sometida.

La recesión agudizada en el transcurso de los años ha constituido un elemento que ha ido golpeando a la clase asalariada, a la clase obrera. Los empleados se han reducido numéricamente, y además han reducido su peso en el conjunto de la sociedad, la fuerza organizada de los trabajadores asalariados en el país ha perdido capacidad de convocatoria y capacidad de enfrentamiento ya que la recesión y la parálisis del aparato productivo conducen a reducciones de los turnos de trabajo,

despidos masivos, generando mecanismos a través de los cuales el gobierno recorta los derechos adquiridos por los trabajadores creándose inestabilidad, privilegiándose formas de contratación temporal que subordinan a los trabajadores a condiciones cada vez más duras de vida y trabajo y desarticulan sus formas organizativas.

La ofensiva en este terreno también va de la mano con propuestas de modificación de los derechos laborales, de las condiciones de trabajo y de los derechos sindicales de los trabajadores. El gobierno está tratando de impulsar un nuevo código general del trabajo y una nueva Ley de huelgas, pues no la hay en el país. Esta ley tendrá como objetivo entorpecer las posibilidades de los trabajadores de acudir a la huelga y limitar los derechos de organización sindical y los derechos laborales que tenían ganados.

El programa económico neoliberal va dirigido fundamentalmente a atender los requerimientos del capital financiero. Es el capital financiero el que ha obtenido los principales beneficios de la aplicación de este programa. Tanto el capital productivo como los sectores de la burguesía que producían para el mercado interno están encarando una crisis muy seria por la contracción del mercado. Esto ha conducido a que incluso sectores de la sociedad nacional de industrias estén demandándole al gobierno que decrete un aumento de sueldos y salarios para reactivar la economía. Estos sectores han sido duramente golpeados, y solamente algunos sectores exportadores y del capital financiero que han conseguido reformas importantes con la liberalización del sistema financiero encuentran satisfechas sus expectativas en este programa económico.

El Estado en el proceso general de aplicación de este programa y como expresión de su crisis está en una situación financiera muy crítica. La recaudación fiscal en el Perú hoy se ha incrementado del 6% en que la dejó el anterior gobierno al 8% del PBI y la diferencia está en que este gobierno aplica lo que llama «caja cero» o «caja emisión cero». Es decir, gasta y paga lo que recauda, si no recauda no paga. En los primeros meses los empleados públicos no recibían sueldo porque la recaudación no alcanzaba y el gobierno no emitía moneda, con ese mecanismo el gasto público se vuelve idéntico a la recaudación, por lo tanto tenemos un presupuesto fiscal sostenido equivalente al 8% del Producto Bruto Interno.

En el Perú tradicionalmente el presupuesto y la recaudación fiscal han oscilado entre el 21 y el 18% del PBI. Esto significa que la capacidad operativa del Estado está reducida realmente a una condición histórica sin precedentes. Además de este pre-

supuesto fiscal, un tercio es dedicado al pago de la deuda externa. Solamente en términos de vencimiento el Perú tiene para 1991 compromisos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y con el BID por valor de 700 millones de dólares. Tiene además atrasos por deudas no pagadas, por moras y multas por valor de 2.600 millones de dólares, exclusivamente con estas tres entidades. La deuda total del país está por alrededor de los 20 mil y pico de millones y la única pretensión del gobierno es resolver con estos tres organismos multinacionales: FMI, Banco Mundial y BID.

El gasto público mensual, dedicado al pago de los vencimientos de las deudas con estas tres entidades, oscilan entre 45 y 60 millones de dólares. En cambio todo el programa de emergencia social para atender a los 12 millones de personas en pobreza crítica reciben solamente 40 millones de dólares. Las condiciones que se derivan son obviamente críticas, pero expresan la firme determinación del gobierno de manejar lo que ha denominado la reinserción en el mundo financiero internacional, con la pretensión de a partir de eso obtener una gran cantidad de créditos e inversiones extranjeras.

El segundo rubro fundamental en este Estado que se retrae de los servicios públicos y de la atención a las necesidades básicas de la población, es los gastos de la guerra para la contención del movimiento social interno. Este rubro cubre los gastos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, que viene siendo más o menos un tercio del gasto corriente del presupuesto fiscal. Ambas carteras tienen autorización para asumir endeudamiento. Este año sin embargo, nadie sabe de dónde van a sacar alrededor de 600 millones de dólares ya autorizados para gastar para la adquisición de armamento y equipamiento de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales. El tercio restante de los gastos es el que atiende Salud, Educación, Vivienda, Agricultura, en fin todos los ministerios de servicios sociales y de rama productiva del país, más los gastos de los gobiernos regionales, y son las instancias que han surgido en un proceso de regionalización que el Perú ha iniciado en los últimos dos años. Estos gobiernos regionales, con asambleas regionales, en las condiciones presupuestarias actuales están virtualmente paralizados y sin ninguna capacidad operativa.

El programa económico ha sido manejado con esas prioridades, ha estado dirigido a atender los requerimientos del capital financiero, lo cual ha producido una brutal recesión interna. El programa, a pesar del bajón inflacionario de agosto y del nuevo paquete económico fuerte de diciembre que tuvo efectos hasta enero, no ha logrado un control de la inflación al estilo del esquema boliviano; en este país se produ-

jo un congelamiento de la inflación, y estabilizó la economía interna a pesar del aumento de la pobreza.

El ritmo inflacionario en el Perú es muy oscilante, en agosto fue 400%, luego tuvimos un ritmo de alrededor de 10% mensual durante septiembre, octubre y noviembre. En diciembre ya los precios relativos del Estado se habían distanciado de los privados y el gobierno lanzó otro paquete que implicó ese mes una inflación de cerca de un 27%; en el mes de enero el efecto de las medidas de diciembre continuó con una inflación que dio alrededor de 17%, luego la inflación bajó alrededor de un 10%, llegó a su punto más bajo en un 6% mensual, y en el mes pasado ha vuelto a repuntar a 11% y para este mes de junio se calculaba que estaría entre 11 y 15% nuevamente. No se ha logrado estabilización en este terreno de control de la inflación y esto crea un desencanto creciente de la población. Se había dicho «esto duele, pero funciona», pero en la práctica lo que ocurrió es que produjo mucho dolor, sin funcionar en ninguno de los rubros fundamentales. No se ha controlado la inflación, se ha mantenido una brutal recesión interna y las condiciones de pobreza de la población se han incrementado y son muy agudas.

Guerra interna

El otro elemento del cuadro político peruano es el hecho de que este paquete neoliberal se aplica en una situación que es particularmente compleja, en la cual hay gobiernos elegidos, como el del señor Fujimori; una guerra interna contra esos gobiernos elegidos y un proceso de militarización que mina el régimen democrático constitucional surgido en el año 80. El fenómeno peruano es interesante en este sentido, porque la guerra interna se desarrolla paralelamente al tránsito del régimen militar al régimen democrático constitucional: la guerrilla del Sendero Luminoso (SL) inicia también sus operaciones en 1980.

El proceso de cambio de la dictadura militar al régimen cívico constitucional va de la mano no solamente con el surgimiento de la guerrilla, sino con la fase de desarrollo de una izquierda de masas unida que logra en la asamblea constituyente más del 31% de la votación nacional; este tercio prácticamente de los votantes peruanos depositó en una opción de izquierda, una opción de cambio y solución de sus problemas.

Conforme se desarrolla la lucha política y la lucha armada, se ahonda la crisis en el país; y conforme las fórmulas neoliberales van agudizándose en su aplicación, el Estado se va tornando cada vez más autoritario, va conculcando y cerrando cada

vez más los espacios democráticos y la figura estatal que se retrae de los servicios básicos y de la atención de las necesidades más elementales da paso a un Estado gendarme, policiaco, a un Estado militarizado.

En el Perú más de las dos terceras partes de la población está bajo estado de emergencia. El estado de emergencia es como su nombre lo indica un estado de excepción, sin embargo en el Perú la excepción es que están en vigencia los derechos constitucionales, y la norma es la existencia de estado de emergencia que lo suprime. En el país las zonas de emergencia están bajo el mando de los comandos político-militares, dirigidos por oficiales que responden ante el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. En esas zonas la autoridad central es militar, no civil. Aunque teóricamente las autoridades civiles existen, los gobernadores nombrados por el Ejecutivo, los alcaldes elegidos por la población, todos están ahí. Los gobiernos regionales que son parte de un proceso de descentralización en curso existen, sin embargo en la práctica los comandos político-militares son los ejes centrales del ejercicio del poder y tienen el control prácticamente absoluto en el campo y gran parte del control y de la autoridad en la ciudad.

En esta zona el régimen de administración de justicia prácticamente funciona sólo en los cascos urbanos, ya que el enorme peso militar garantiza en lo fundamental la impunidad de los crímenes y la acción de los factores del Estado que ha ido acompañando todo este proceso de militarización. El Perú tiene el triste privilegio de ser por cuarto año consecutivo el primer país en el mundo en materia de denuncias, de detención, desaparición de personas. Este año ha sido el cuarto año que el país ocupa el primer lugar en la instancia respectiva de Naciones Unidas. Hay largamente más de 3.000 casos de detención y de desaparición de personas y hay también más de 20.000 muertos por el desarrollo de la violencia política, del terror del Estado o del accionar de SL. Obviamente la gran mayoría de estos muertos es civil y principalmente campesina.

En el campo la presencia militar es fundamental, y la administración de justicia es prácticamente nula. Esto ha dado origen a un fenómeno importante, a un reto importante para las fuerzas políticas, porque la militarización de la sociedad ha conducido a una retracción en el campo de las fuerzas políticas organizadas. Hay significativas zonas del país en las cuales no hay procesos electorales, no funcionan las autoridades elegidas, y los mandos son de las FFAA o de las organizaciones armadas, particularmente de SL. El vacío de poder del Estado, su retracción tanto por la desatención de necesidades como por desarrollo de la guerra interna conduce a una política de generación de nueva autoridad en esta zona. Esta autoridad

puede ser asumida por los militares, en las bases contrasubversivas, o aldeas estratégicas o por SL. En el caso de Sendero esta organización constituye los «comités populares» que son autoridades políticas y militares en un área determinada. Estos comités de Sendero son nombrados por decisión del propio SL, no son elegidos con participación de la población. Muchas veces estos organismos se asientan sobre la destitución de las autoridades comunales que los propios campesinos han elegido, ya sea por la vía del asesinato o por la vía de la humillación: les cortan el pelo, los azotan en público, los flagelan y los destituyen del cargo y los sustituyen por estas autoridades nombradas por ellos. En estos comités de SL hay un comisario político, y un comisario militar.

En otras zonas, el vacío dejado por el Estado ha conducido al desarrollo de lo que se conoce como poder comunal. Las organizaciones basadas en las comunidades campesinas, que son agrupaciones que no sólo tienen identidad cultural, coherente. Si bien es cierto que en su gran mayoría estas comunidades son de campesinos parceleros, criadores pequeños de ganado, entre ellos tienen una serie de lazos y resuelven en común una serie de problemas. Esto engendra el desarrollo de una autoridad basada en la Asamblea Comunal con la participación de la población, que encara y resuelve los problemas con mecanismos propios.

Por todo lo señalado, el quehacer político en el campo ha ido necesariamente vinculado al desarrollo de la «autodefensa de masas», frente al terror de Estado y la guerra sucia que impone una fuerza armada extraña a la población, ajena a las mayorías nacionales y frente a SL cuyo mecanismo político descansa en una intensa utilización del terror político. Sendero es una fuerza realmente muy especial y muy curiosa en América Latina; algunos la denominan «fundamentalista», por sus concepciones profundamente dogmáticas y autoritarias. SL, por ejemplo, casi no tiene documentos; la instrucción política de la militancia se da a través de versiones orales que cada militante copia en cuadernos. Es impresionante ver lo mucho que se asemejan los contenidos de los cuadernos entre una región y otra del país. Gran parte de las charlas se apoya en la reproducción de citas de Mao puntualmente entrecuadradas y citadas y la reflexión parte de este tipo de aproximación. Sendero es una fuerza que además recoge en su accionar político un principio de autoridad cuyo peso en el país es fuerte: el uso de la violencia, la fuerza, el temor.

El campo peruano ha estado marcado por el fenómeno del «gamonalismo» en las relaciones del terrateniente autoritario y brutal con la masa campesina; el ejercicio de la fuerza ha sido un factor central. El temor, el miedo, son factores políticos centrales en la lógica de SL y lo utilizan implacablemente en el país; su política es real-

mente sectaria, ellos son el partido, el frente, el ejército y serán el Estado en su lógica política. Todo lo demás oscila entre el camino de la burguesía burocrática - como califican ellos, utilizando los términos de Mao, a las capas dominantes en el país - o la izquierda no senderista a la que califican como revisionista, traidora, como instrumento del social imperialismo o como instrumento de la burguesía burocrática, o «cabezas negras» denominación que utilizan apropiándose de conceptos que son más de orden asiático que nacionales.

Crisis de las izquierdas

Sin embargo, la profundidad de la crisis y el hecho de que el Estado responde con mecanismos de terror y violencia generalizada, conduce a que zonas importantes del país se hayan polarizado entre fuerza armada y Sendero, y obliga a que las fuerzas políticas que quieran operar en estas áreas tengan necesariamente que tener algún tipo de desarrollo político-militar para poder actuar y tener presencia en esas áreas. De lo contrario tendrían que replegarse o actuar solamente a través del Estado; es decir amparándose en la representación policial o militar en el país. Este hecho conduciría, obviamente, a aparecer en el conflicto de parte de uno de los bandos en confrontación.

Este proceso de militarización de la sociedad y desarrollo de la violencia ha ido de la mano con otro elemento que es el desgaste del sistema político, del régimen político surgido en el 80. Síntomas de ese desgaste son:

Primero, en la capital, un candidato a alcalde sin partido, absolutamente independiente, quien optó por participar en el proceso diferenciándose de todas las fuerzas políticas organizadas en el país, fue electo. Este hombre, un animador de televisión, dueño de un canal, se postuló como candidato y le ganó a todas las fuerzas de la capital, a los candidatos formales de la derecha y a los candidatos de centro y de izquierda; barrio y obtuvo el control de la municipalidad. Pocos meses después vino el proceso de elecciones generales y terminó ganando Fujimori, cuyas expectativas electorales se grafican en el hecho de que era candidato a la presidencia y a la vez candidato a senador de la República en su propia lista. En Perú la legislación permite que el candidato a la presidencia también se postule como candidato al parlamento.

Sin embargo, en medio de este fenómeno de deterioro de la representación de las fuerzas políticas surge Fujimori, gana las elecciones y se produce un nuevo síntoma de esta desconfianza de la población en la institucionalidad del país como me-

canismo capaz de atender sus requerimientos y de lograr la solución de sus problemas. Este deterioro de los partidos políticos y de la representación institucional alcanza al propio Estado. Es decir, no solamente tenemos elementos de crisis del régimen político, sino también hay elementos de crisis de Estado abiertos en el país.

Segundo, el fenómeno de doble carácter que se está dando al interior de las fuerzas armadas en el Perú, es muy importante. Por un lado tenemos fascistización de los mandos militares; como producto de 10 años de guerra interna este mando se ha vuelto cada vez más autoritario, brutal, represivo y contrario a la negociación. Por ello - yo creo - en contradicción de todo lo que está pasando en el grueso de América Latina, la tendencia en el corto plazo y mediano plazo en el Perú no es hacia la negociación de la guerra, sino hacia el desarrollo del conflicto armado. Por otro lado, se está produciendo en la tropa el fenómeno de la aparición - sin precedentes en América Latina - de movimientos femeninos, vinculados al personal subalterno de las fuerzas policiales primero, y luego al ejército de la marina y en menor escala al de la aviación. En este asunto se han ido combinando varias cosas: el desarrollo de cuatro huelgas policiales en los últimos diez años, alguno de ellos con movilización de personal subalterno, con toma de locales policiales, comandancias, una de ellas con una duración de cuatro días; las movilizaciones de policías armados por las calles, con la cara cubierta con pañuelos, adoptando consignas del movimiento popular, tipo de: «si no hay solución la huelga continúa», «la policía unida jamás será vencida»; resultaron en más de mil juicios contra policías y condujeron también al desarrollo de movimientos reivindicativos clandestinos. Actualmente hay un movimiento que se llama «Pueblo Uniformado», y un sindicato de policías que está en curso de organizarse. Pero además ha surgido el movimiento femenino «Familia Policial». Este es un movimiento de esposas, hijas o madres de policías, quienes han desarrollado ya dos huelgas de hambre con tomas de iglesia, marchas en las calles, reclamando aumentos de salario, mejores condiciones de trabajo del personal. Este movimiento ha tenido inclusive dos negociaciones con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para discutir sus demandas de aumentos, bonificaciones, pagos en los colegios policiales, etc. Este fenómeno organizativo se ha extendido hacia personal subalterno, del ejército y la marina particularmente. En la marina que ha sido tradicionalmente el cuerpo más reaccionario, ha cobrado especial fuerza, y el hecho de que los mandos sean más autoritarios con el personal subalterno, presta condiciones que facilitan la extensión del movimiento. Como resultado, se ha formado una coordinadora del personal subalterno de las fuerzas policiales y fuerzas armadas que opera clandestinamente, amenaza con paros, y brinda conferencias de prensa.

Aunque este es un fenómeno todavía de extensión limitada es muy indicativo de la profundidad que la crisis tiene en este terreno.

El desarrollo de esta crisis del esquema político, de carácter general, incluye la izquierda; la izquierda de la que hemos participado nosotros, la Izquierda Unida, la Socialista, y las fuerzas que han participado en lo que se ha denominado la lucha por ocupar espacios políticos, y en la lucha cívica.

Este es un problema interesante de examinar en la experiencia latinoamericana. El desgaste que produce una determinada concepción del manejo de la lucha política y de la lógica del poder en las fuerzas políticas, y el hecho de que la izquierda haya limitado su acción política, centrando su atención en ocupar los espacios del viejo Estado, penetrarlo, ocupando diputaciones, senadurías, alcaldías, gobiernos regionales, ha hecho que esa izquierda adquiera varias características. Primero, se convierte en una mediadora entre el movimiento social y el viejo Estado, y a la vez que mediadora se transforma en una especie de colchón o parachoque de una serie de problemas sociales. Segundo, las izquierdas terminaban, además de mediando, conduciendo negociaciones con pocos resultados prácticos, porque los modelos económicos que se han venido aplicando tienen escasa capacidad de alteración. Esta combinación de participación en el viejo Estado con escasa capacidad de alteración de sus modelos, y poca probabilidad de atención a los requerimientos de las mayorías hacen que la izquierda absorba parte significativa de ese desgaste.

Esto tiene que ver con un segundo elemento en el caso de la crisis de la izquierda, y es el hecho de que este sector burocratiza su accionar. La participación en los mecanismos del Estado tiende a aislar a una parte importante de los dirigentes del movimiento social de su vida cotidiana de su quehacer permanente, y por lo tanto tiende a producirse una distancia en la comunicación y capacidad de dirección entre la conducción de la izquierda y el movimiento social en el Perú.

Gran parte de los dirigentes nacionales de los partidos de izquierda es de diputados o senadores, su dinámica central gira alrededor del escenario público y esto los absorbe crecientemente. Además, se ha producido una distancia con la lucha concreta de la población; nuestra izquierda que nació del movimiento social, de sus luchas, del movimiento sindical, campesino, barrial, juvenil y que estuvo directamente vinculada a las acciones de ese movimiento ha terminado asumiendo una función distinta, la de ser articulador con el Estado, mediador y por lo tanto ha abandonado su identidad con el sector que le dio origen.

Esto está vinculado con elementos de cambios en las propias condiciones de vida de sus dirigentes, tanto de ingreso como de medios cotidianos que van marcando también este fenómeno cuya incidencia no se puede minimizar.

Lo cual deriva en un tercer factor; la izquierda, en parte importante de su representación, en el país, va abandonando algunos instrumentos y concepciones fundamentales y va asumiendo cambios ideológicos. La izquierda en toda esta fase va abandonando sus programas y va sustituyéndolos por plataformas inmediatas. Este es uno de los problemas centrales que hoy confronta la izquierda en el Perú y en varios países de América Latina. El proyecto nacional, y el programa que va dejando son sustituidos por plataformas reivindicativas inmediatas: el aumento de salario, la defensa del derecho tal, la defensa de este espacio que estaba conquistado, en síntesis por un conjunto de planteamientos parciales que van paulatinamente desdibujando la propuesta de sociedad y de país que esa izquierda levanta.

También, la izquierda va perdiendo su concepción de poder popular. En la Izquierda Unida, para sus orígenes, desarrollamos una fórmula que define nuestra concepción estratégica, decimos: «queremos ser alternativa de gobierno y de poder», y con esto tratábamos de sintetizar y vincular esos espacios que están relacionados entre si, pero que son diferentes, el gobierno-el Estado, el gobierno-el poder. Esta temática, esta relación entre estos dos factores es una relación conflictiva y difícil, y las fuerzas políticas de la izquierda tienden a priorizar uno de los dos en su manejo; la tendencia ampliamente mayoritaria ha sido priorizar la alternativa de ser gobierno, y esta priorización a la alternativa de ser gobierno ha ido vinculada a la idea de gobernar con el Estado que tenemos; es decir, ser gobierno del viejo Estado, del Estado antidemocrático que está en crisis; del Estado que es autoritario y represivo del movimiento social.

Hay un elemento de contradicción interno en el fenómeno político que vivimos muy importante que va conduciendo a reformulaciones de la propuesta política y que va conduciendo también a un abandono de lo que es la fórmula del poder popular. El poder popular es otro componente de la concepción estratégica que dio origen a la Izquierda Unida. Al nacimiento de este frente se pensaba en la generación de un contra-Estado, y de la definición de esa organización de masa de nuevas formas de autoridad, que se irían contraponiendo con la vieja autoridad del Estado, y esta dinámica, esta dialéctica de contradicción entre el viejo poder y el nuevo poder, permitiría el surgimiento desde la base social de un destino distinto, y la apertura a una nueva organización estatal en el país.

El tema de la relación entre el ocupar los espacios del Estado, su funcionalidad de ese copar espacios, con la gestación y creación de nuevas formas de poder, y de autoridad que sean a su vez contradictorias con las formas de organización, de definición del Estado existente, está aún sin resolverse. Esta contradicción es probablemente el problema político más serio que en su concepción estratégica y táctica tiene la izquierda, porque la afirmación de una vía tiende a debilitar la otra; y el crecimiento de la autoridad de uno tiende a la disminución de la autoridad del otro. Esta contradicción tiene por otro lado planteado el tema de en qué momento es que se producen los mecanismos de ruptura, dé crisis del viejo poder para su sustitución, y la forma en que se sustituye por el nuevo poder, por la nueva autoridad. Algunas fuerzas en América Latina han denominado a este tema el tema de la reforma del Estado, el tema de las modificaciones en las instituciones vigentes para producir un cambio al interior del Estado y abrir las condiciones de lo que algunos llaman la democracia plena, abrir un espacio para la democracia directa o desarrollar lo que se llama la democracia participativa, etc. El gran problema que se está viendo en el Perú es que el viejo Estado es un Estado en crisis, es un Estado fuertemente militarizado, autoritario y comprometido con una política económica y social, que es absolutamente impermeable a determinadas concepciones.

La crisis de la izquierda peruana no es una crisis parcial, está inmersa en una crisis real de la sociedad, y tiene que ver con la reubicación de la izquierda al interior de esa crisis general.

Preguntas relativas a la profundidad de esta crisis son: ¿Por qué la ofensiva neoliberal logra tener la fuerza que tiene como país?, ¿cuáles son las razones por las que hemos permitido ese avance? Porque el avance de uno es el retroceso del otro, y esto obviamente no puede ser explicado simplemente por razones externas. La verdad es que la crisis del socialismo burocrático o no, real o no, y la capacidad del capitalismo de entrar a un nuevo ciclo son una explicación insuficiente para entender la capacidad de éxito de esta ofensiva. Sabemos que hay varios elementos relacionados con nuestra experiencia y la incapacidad que hemos tenido para responder con eficacia a la ofensiva neoliberal.

En primer lugar nosotros no hemos ubicado correcta y adecuadamente los problemas principales a encarar en esta fase de la lucha política en el país. Comprender en el cuadro internacional la ofensiva del imperialismo, las variantes que se han producido en ese terreno, la correlación de fuerzas, nos lleva necesariamente a plantearnos el problema nacional y democrático como el problema fundamental a encarar en las nuevas condiciones actuales. La hiperconcentración en los proble-

mas del proletariado de los sectores asalariados, y la desatención de los problemas de otros sectores de la sociedad que son parte mayoritaria del espectro nacional, constituyen un elemento que sin lugar a duda está en la base de los problemas que la izquierda ha tenido. Los sectores izquierdistas más tradicionales se han venido estrechando a la par que se ha ido reduciendo el peso del movimiento sindical tradicional, sin que se creara capacidad para expandirse y llegar a otros sectores de la sociedad no asalariados y que sin embargo forman parte del contingente popular y de la problemática nacional.

En segundo lugar, la ausencia de un proyecto nacional, capaz de integrar a ese conjunto de sectores es fundamental, y en esa ausencia está a mi entender implícito la falta de un balance crítico, sobre el tema de la experiencia y de las concepciones del socialismo real que funcionó para muchos sectores como modelo y como proyecto. Este modelo tenía varias tesis organizadas en la lógica y el sentido común del militante de izquierda, y ha sufrido notorias variantes.

En la experiencia peruana su influencia radicó en:

1) Nuestro proyecto tenía un contenido autárquico, se trataba de preservar una isla propia, la nuestra, y esta isla debía tener un modelo económico, capaz de autosatisfacer todas sus necesidades. Teníamos que reproducir bienes de capital, bienes de consumo, desarrollar una base alimentaria propia capaz de resolver los requerimientos alimenticios de la población y el contacto con el exterior era visto como secundario. Ahora es mucho más evidente la interconexión que hay en el mundo y la práctica obligatoriedad de funcionar con un proyecto que necesariamente se inserte en éste, defendiendo el espacio de su proyecto nacional. Con los problemas de Europa del Este Unión Soviética, etc., esto se ha hecho obvio, sin embargo, es también claro que el modelo económico importando ya sea de China, o de la URSS, era un modelo propio de «países continentes» como éstos. Independientemente de las críticas a la concepción que respaldaba el modelo soviético o chino, es obvio que esos países tenían el potencial y la posibilidad de plantearse, mas nosotros no. Sin embargo, esta concepción marcó mucho la experiencia de la izquierda peruana y el modelo que nos planteábamos, que era un proyecto básicamente del partido.

2) Este modelo al que la izquierda aspiraba venía marcado por una deformación de las propias concepciones del socialismo, por ejemplo la relación mercado-planificación. Muchas de las discusiones de la izquierda sobre el balance de lo ocurrido en Europa oriental y en la Unión Soviética están marcadas por la historia de la falta de democracia, es decir falta de participación directa de la población, la excesiva iden-

tividad del partido con el Estado, la utilización de los sindicatos como correa de transmisión del partido. Fue muy negativo el efecto de que en la URSS se haya eliminado la concepción del soviét en su vinculación con la delegatura de las clases productoras y de la defensa nacional; que se haya cambiado la concepción original de los soviét como centro del Estado, no del partido, y como representación social directa en el Estado socialista de los productores, los trabajadores y sus organizaciones básicas, evitando que el Estado fuera instrumento directo del partido, contribuyendo a que éste tuviera presencia estatal a través de la hegemonía que se ganaba entre esos representantes directos.

La concepción original de los soviét implicaba que las capas sociales participaran como tales, con múltiples formas de representación en el Estado, no sólo a través del partido o del frente político.

3) Otro elemento de la crisis de los modelos socialistas que se ha discutido más adecuadamente es el de la infraestructura económica que había bajo este modelo, junto con el tema de planificación. Sin embargo el peso del análisis ha estado puesto en el problema del excesivo centralismo y planificación: cuántas camisas se producirán, cuántos metros de hilos, peines, tractores, criticándose una concepción de la planificación que tendía a eliminar completamente el mercado sin analizar con profundidad que partía de un desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo tecnológico, y una capacidad y productividad del trabajo inexistentes. Ahora vemos que el esquema de la concepción marxista corresponde a una elevadísima fase del desarrollo de la sociedad, que teóricamente permitía una posibilidad hacia el futuro, pero no se dio. Ahora encontramos que uno de los problemas centrales que la situación política nos plantea es cómo nos movilizamos en un proyecto económico; cómo elaboramos una propuesta económica capaz de integrar a los contingentes necesarios el rol del mercado como instrumento económico, pues éste es fundamental y además inevitable, en la concepción misma del socialismo, del tránsito del capitalismo; cómo llegamos a la sociedad sin clases, a la sociedad comunista que es el pueblo, a través de relaciones de producción y formas de organización de la producción en que la ley del valor y en que el mercado siguen jugando un rol.

Pienso que de lo que se trata es de tener mecanismos que limiten el control en este terreno; yo creo que el mercado no nos creará un problema, lo que puede ser problema es el hecho de que nuestras economías están centralmente manejadas por mecanismos en los que no hay oferta y demanda; nuestras ciudades están altamente monopolizadas, el gran capital tiene el control central en la producción, en el comercio, en las finanzas. El enemigo principal de la posibilidad de desarrollo de las

fuerzas productivas, y de la atención del requerimiento de las mayorías, en nuestra experiencia concreta, en la existencia de una economía en una fuerte centralización y concentración del capital.

Por lo tanto, el programa económico, a nuestro entender, tiene que llevar una lógica de enfrentamiento a la monopolización de la economía, y recoger ese proyecto en la lucha contra estos monopolios que oprimen el desarrollo de las fuerzas productivas y la expansión de la pequeña y mediana propiedad, de la pequeña y mediana producción, de la producción asociativa así como los trabajadores asalariados. Nuestro proyecto debe promover el desarrollo de una economía capaz de retar este control monopólico, y abrir paso hacia una organización económica notoriamente más democrática, que vaya de la mano con la producción no solamente asociativa, sino también privada, de pequeños y medianos, o mixta, en la cual exista capacidad de expansión para sectores fundamentales de la población que desarrollan actividades como productores privados en este terreno. Este proyecto debe incluir mecanismos que nos permitan combatir esa concepción a favor de la total estatización de todo.

Otro problema a afrontar es el de la productividad del trabajo y la relación de ésta con el beneficio que obtiene el trabajador o el productor. Este es un problema sujeto a discusión desde hace tiempo, y está ligado al esquema de los estímulos materiales y morales. La experiencia que nos deja la lógica de la estatización de todo y el control estatal de todas las ramas de la producción, es de una pérdida enorme de la productividad del trabajo. La productividad del trabajo ha ido en descenso. La tendencia del mejoramiento, de la tecnificación de la fuerza del trabajo se ha estancado y la capacidad de producción global de la sociedad también. Supongo que esa experiencia nos plantea la necesidad de modificar concepciones y lógicas, frente a la necesidad de democratizar la estructura productiva, y esto nos plantea el problema de manejar pública y económicamente no solamente el ámbito de la propiedad, sino también el ámbito de la gestión de la producción y la participación de los trabajadores en ese terreno. Por aquí nosotros creemos que hay otro elemento básico del modelo económico que tenemos que levantar, sistematizar y desarrollar.

Desafíos

La izquierda peruana se siente afectada por la ofensiva neoliberal ideológica, ofensiva neoliberal profundamente antiestatista. Esta situación tiene que ver con una razón muy simple y es que la izquierda peruana identifica al Estado con el socialismo. Cuando el gobierno militar peruano comenzó a confiscar un montón de em-

presas, el Partido Comunista emitió una resolución del comité central en la que se expresaba que las fuerzas armadas eran la vanguardia de la juventud, y que el partido se replegaría al reconocer esa vanguardia. Ese ejemplo muestra cómo esa identidad entre Estado y socialismo, donde el eje del socialismo no es la autogestión de las clases trabajadoras en todos los campos, ha conducido a que la izquierda adquiriera una fuerte ligazón con todo lo que se ha hecho aquí, lo cual la limita pues el Estado en nuestro país para las masas es un instrumento ineficaz y corrupto. Las empresas públicas han sido empresas absolutamente ajenas a las necesidades de las regiones donde se han desarrollado y entrado, muchas veces como enclave. El Estado está ahí como un lunar en una zona geográfica donde a la población aledaña muchas veces ni siquiera da empleo, puesto que llevan personal de otros lugares. Las empresas estatales no han compartido servicios en su gestión ni han dado participación de las organizaciones sociales, ni a sus propios trabajadores. ¿Por qué habría la población trabajadora, la mayoría del país, sentir simpatía por el Estado? ¿Qué le ha dado el Estado que no sea una administración pública corrupta, una relación autoritaria y represiva y una sociedad crecientemente militarizada para que la población tenga que sentir niveles de identidad con él?

La propuesta programática positivamente estatista que manejaba la izquierda permite que con la ofensiva neoliberal se puedan matar dos pájaros de un tiro: el socialismo y el populismo pues ambos en sus experiencias conocidas propugnan por un Estado grande.

El desafío que tiene la conducción de la izquierda de este país de reformular una propuesta en este terreno se abre con especial fuerza para ponernos a la ofensiva. Hay sectores de izquierda que por no haber tenido una opción crítica independiente y un criterio autónomo propio frente a las experiencias de la Unión Soviética, China, Europa oriental, por haber tenido dependencia ideológica, han perdido vitalidad y preocupa que muchos sectores de izquierda que tomamos mucha distancia de esos modelos, por las políticas de frente y de integración en que participamos con el conjunto de izquierda, paguemos la factura de una comida que nunca gozamos y que tengamos que recibir hoy la responsabilidad de un conjunto de experiencias que no fueron nuestras, pero que sin embargo hoy la derecha, al desarrollar su ofensiva, ha logrado generalizar haciendo de algún modo a toda la izquierda corresponsable y copartícipe de esta concepción del socialismo.

Otro problema clave en el caso de la crisis de la izquierda, es el tema de la democracia al interior no sólo del Estado y de la sociedad sino al interior de los propios partidos. Esto está ligado al hecho de predicar cosas que no se practican, de propo-

ner métodos que no se aplican, de desarrollar slogans que no se pueden llevar a la práctica; y al desarrollo de la democracia interna del tratamiento limitado de las contradicciones y la participación de la población.

Estos problemas parten desde la concepción del partido, en la cual el partido de cuadros, el partido de vanguardia aparece en contradicción con el partido de masas, o como se le quiera denominar. Nosotros creemos que la propuesta de partido debe combinar un partido de masas con una red de cuadros a su interior, y creemos que la forma de evitar que esa red de cuadros se convierta en una administración permanente, burocrática, es promoviendo la obligatoria renovación periódica de la dirección.

En nuestro partido, por ejemplo, el secretario general no puede ser reelegido y el comité central tiene que ser obligatoriamente renovado en un porcentaje determinado en cada congreso. La dirección y las comisiones tienen que sufrir rotaciones. Con este esquema tratamos de mantener la experiencia ligada a la renovación, y garantizar un flujo de nuevos cuadros en el partido.

Nuestra idea de base además es evitar, al máximo posible, tener cuadros profesionales del partido. Si el profesional del partido se vuelve necesario tratamos de rotarlo periódicamente porque efectivamente hay tareas funcionales que requieren de cuadros profesionales. Sin embargo, también apreciamos que la existencia de profesionales muchas veces conduce a una relación distorsionada con el movimiento social concreto, con las clases productoras. Por lo tanto, frente a la lógica del partido de «los esclarecidos», que pasan examen de los conceptos teóricos y fundamentales para tener derecho a elegir y a ser elegidos, estamos por un partido que integre mucho más abiertamente a la dirección natural del movimiento popular, a los dirigentes que surgen del movimiento y que tienen en sí una conciencia que es producto más de su experiencia que de los manuales. El partido debe sistematizar e integrar como parte de su proyecto esta experiencia dotándose de una forma de organización con una estructura de cuadros, a quienes entendemos no como profesionalizados, sino como militantes de mayor nivel, de mayor formación y de mayor capacidad para aportar a las tareas de organización y de conducción del partido. No creemos por lo tanto en la concepción de partido vanguardia - élite -, que se vincula a través de determinados cordones umbilicales con las masas, capta su sentimiento y lo traduce, sino en un partido que se vincule lo más estrechamente posible en sus propias bases militantes al movimiento social, un partido además que esté abierto a las críticas y a la evaluación del movimiento social, un

partido que sepa recibir del movimiento social organizado las opiniones que éste tiene sobre su accionar y sobre lo que el partido tiene que hacer y desarrollar.

Un segundo problema serio al interior de los frentes de izquierda y los propios partidos es la democracia interna, la capacidad de decidir, la capacidad de elegir y de ser elegidos, la capacidad de participar en la discusión. La estructura para la lucha armada es una estructura militar, difícil combinar con una estructura de debate interno, de elección, de discusión. Las órdenes no se discuten, se aplican, y el cómo combinar la relación entre una comandancia y un comité central, o una dirección política central es un fenómeno complejo aunque nosotros no lo hemos sufrido.

En nuestro caso el problema no viene por la inclusión de lo militar dentro de la estructura política, sino más bien por una tendencia a fijar las convicciones políticas como convicciones permanentes, a eternizar las direcciones y a no aceptar la opinión de la militancia. En el caso peruano esto ha conducido a realidades complejas. Esta situación salió a flote con la escogencia de los candidatos a lanzar en las elecciones pasadas. En el proceso de elección interna algunas fuerzas de Izquierda Unida que creían que los resultados no le iban a ser muy favorables resolvieron abstenerse de participar en las elecciones internas, buscando usar mecanismos que generaran menor participación o en todo caso si la participación en esas elecciones era pequeña, tener argumentos para discutir el punto en una instancia aún pequeña. Por lo tanto la propuesta era resolver una democracia limitada con una ausencia de democracia. El uso limitado de mecanismos democráticos internos generó una crisis de mediano alcance, pues al aceptar ese y otros rejuegos en aras de la unidad hizo esa unidad más frágil, se escindió, conformando lo que se llamó la Izquierda Socialista con el anterior presidente de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes. Este grupo obtuvo el 3% de la votación nacional, y el resto de la izquierda que quedamos como Izquierda Unida sacamos 7% de la votación nacional. En 10 años pasamos del 31% al 10%, lo cual obviamente nos puso en una situación de crisis muy seria.

La solución de esta crisis es compleja, pero aparte de lo que ya he mencionado creo que pasa por hacer creíble la oferta del futuro. Este es un problema especialmente complejo, porque desarrollar formas democráticas y participativas en una sociedad en creciente militarización y en la cual los espacios democráticos se recortan es extraordinariamente difícil, pero la experiencia nos conduce a pensar a que es posible a partir del desarrollo de actividades y acciones en zonas de emergencias en la que hemos podido combinar formas de participación en la vida política y en la organización social de la población apoyándonos en formas organizativas naturales del

movimiento popular. En el caso del campo, nos hemos apoyado en la organización de las comunidades campesinas y en las organizaciones asociativas que tienen una fuerte raigambre y que son una base organizativa democrática y productiva. En el caso de la ciudad, en el desarrollo de una lucha dentro de la cual se ha visto como esencial reivindicar el ejercicio de los derechos democráticos en alianza múltiple con diferentes instituciones, como por ejemplo la Iglesia progresista, que ha jugado un papel muy importante en el esfuerzo por abrir y mantener estos espacios democráticos y trata de contener el avance militarista.

Nosotros sabemos que esta experiencia nuestra, que obviamente esta en reflexión crítica, no encuentra todavía las respuestas a una gran cantidad de problemas, sólo marca algunos elementos centrales que vemos como tareas hacia adelante. Estas tareas son:

Primero, encarar con mucha firmeza la crisis de dirección política del movimiento popular tanto a nivel de conducción político-partidaria y de frente político como a nivel de frente de masas, creo que esto pasa por un proceso de discusión y renovación ideológica programática y organizativa.

Segundo, creo que la situación nos obliga a levantar un proyecto nacional y democrático de justicia social para las mayorías que plantee el reto de, en primer lugar, sobrevivir como nación frente a la ofensiva neoliberal y que tenga como eje central la atención a las necesidades básicas de la población que son realmente agudas y el tema de la democracia interna y de los derechos democráticos, luchando contra la militarización, contra el autoritarismo, contra el cierre de estos espacios que las masas han conquistado y que aspiran a profundizar y a desarrollar plenamente.

Tercero, nos planteamos en esta alternativa la necesidad de tener una propuesta de paz para el país, basada en la justicia social, en la desmilitarización del Estado y de la sociedad. Este tercer problema es parte central del proyecto nacional y toma en cuenta el hecho de que hay una guerra interna con altísimos costos en vidas humanas que tiene que ser atendido.

Un cuarto asunto que nos planteamos en este terreno es la reconstitución del movimiento popular impulsando un frente nacional y democrático que sea capaz de ser alternativa política en el país para superar la crisis de representación que tienen las fuerzas tradicionales, y buscando un canal de participación directa del movimiento social. Es decir, un frente que no sea una simple suma de partidos y militantes, sino que esté abierto a formas y canales de participación bastante más amplios.

En quinto lugar nos planteamos el tema de la integración de fuerzas latinoamericanas en el afán de responder al reto que implica la propuesta Bush. Para nosotros este es un problema fundamental, entre otras cosas porque uno de los factores de militarización en el país es la «guerra andina contra las drogas» que se plantea Bush y que propone una creciente intervención militar norteamericana en Bolivia, Perú y Colombia a través de tratados bilaterales antinarcoóticos. En los casos peruano y boliviano estos tratados ya se firmaron y la presencia norteamericana tiende a acrecentarse. Para nosotros no es problema de corte secundario, pues en el Perú hay 200 mil campesinos, jefes de familias quienes producen hojas de coca, y más de un millón de peruanos están directamente vinculados a la coca y la producción de droga. En total eso nos da casi cuatro millones de personas, o cinco si hablamos de sus dependientes - pues ellos son cabezas de familias -, que tienen de una manera u otra ligada su sobrevivencia al tema de la droga en el Perú. La droga produce para el país entre mil y mil quinientos millones de dólares en divisas anuales, esto es entre un 30% y 50% del valor de las exportaciones legales del Perú. La presunción de cortar una cosa de ese estilo de la noche a la mañana es realmente imposible, además de ser un absurdo económico. Los norteamericanos han hablado de suplir este movimiento económico que va entre mil y mil quinientos millones de dólares, con inversiones de 60 millones de dólares anuales en desarrollo y alrededor de 50 millones anuales en gastos militares de represión en las áreas productoras de coca que son en su gran mayoría de actividad guerrillera. Además del problema económico que esto supone nos preocupa la tendencia a hacer una identidad narcotráfico-subversión por parte del gobierno. Entendemos que todo esto da un buen pretexto para que se cree una vinculación entre el Estado Mayor de las fuerzas armadas peruanas con el Comando Sur de los EE.UU. a través de los asesores, y el desarrollo de las acciones de guerra en esas áreas del país. El subsidio a los militares para combatir la droga se convertiría además de un subsidio general para las FFAA y por lo tanto la atadura y conexión con los EE.UU. y la dependencia del Comando Sur iría, sin lugar a duda, creciendo. El tema de la droga tenemos que encararlo buscando acciones de integración entre los productores cocaleros de Bolivia, Perú y Colombia; a la vez que programáticamente planteamos alternativas. Nuestra posición es contraria a la propuesta norteamericana de sustituir y eliminar la hoja de coca del país. Nosotros concebimos que la coca tiene una fuerte raigambre cultural. Hay más de 4 millones de personas en Perú quienes consumen hoja de coca como un elemento estimulante que no tiene nada que ver con la cocaína. Coca y cocaína no son lo mismo.

La cocaína es uno de los 14 alcaloides que la coca tiene, y la coca ha sido un factor de uso en el país desde la época del imperio incaico - una de las principales civili-

zaciones en América - y ciertamente los incas no eran ni drogadictos, ni una civilización degenerada. Nosotros ofertamos a los EE.UU. la coca como un elemento a utilizar para descocainizar a sus cocainómanos. EE.UU. tienen cerca de 11 millones de cocainómanos que podrían ser tratados con infusiones de té de coca. Está científicamente comprobado que el té de coca es un elemento compensatorio que permitiría a Perú - sólo para tratar a los 11 millones de drogadictos norteamericanos - una exportación de alrededor de 1.200 millones de dólares en hojas de coca a los EE.UU. en forma de infusión para tratamiento médico. Reclamamos por lo tanto el derecho a que la coca sea reconocida como un recurso natural, y que exista el derecho a industrializarla, a desarrollarla para fines médicos u otros fines ajenos al desarrollo de la cocaína.

Aunque este tema de la coca está en debate y es un factor de militarización y de injerencia extranjera cada vez más importante, lo menciono porque es un punto que hace posible la integración subregional andina. Para nosotros el tema de la integración constituye uno de los elementos centrales a desarrollar desde una propuesta de la izquierda, pues creemos para aparecer como alternativa viable ante la población debemos también tener una propuesta de inserción en el mundo. Es obvio que en un mundo tan interconectado como éste aparecer como una fuerza sin vínculos, relaciones y propuestas hacia afuera constituye una limitante grande para la izquierda. De allí que pensemos que la propuesta que se ha ido avanzando desde el Foro de San Pablo, y de las distintas reuniones de partidos de izquierda y fuerzas democráticas y progresistas en este terreno tiene un papel importante a jugar hacia adelante en la consolidación de la identidad de la izquierda latinoamericana y en el esfuerzo de elaborar propuestas de integración alternativas a la de subordinación que ofrece Bush en el plan de las Américas.